

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

COMPILACIÓN RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Santo Domingo de Guzman, República Dominicana

ENERO, 2025

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

BUFETE DIRECTIVO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 2024-2025

ALFREDO PACHECO OSORIA
Presidente

DHARUELLY LEANY D´AZA CARABALLO
Vicepresidente

EDUVIGES MARÍA BAUTISTA GOMERA
Secretaria

JULIO EMIL DURÁN RODRÍGUEZ
Secretario

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ÍNDICE

Prólogo.....4

1) Marco Legal que rige el Régimen Ético y Disciplinario de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.....5

2) Misión, Visión y Valores institucionales.....6

3) Régimen Disciplinario de los Legisladores.....7

Elección de los Diputados.....8

Derechos y Deberes de los Diputados.....9-11

Del Régimen Disciplinario de los Legisladores.....12-18

4) Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.....19

Principios Fundamentales de la Ley 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional.....20

De los Principios de la Ley 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional.....20-22

Del Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados de la República.....23-45

5) Otras disposiciones legales de cumplimiento de los Legisladores, funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados de la República.....46-52

Ley No. 311-14 Sobre Declaración Jurada de Patrimonio

Ley No. 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano

Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones con Modificaciones de la Ley No. 449.06 y su Reglamento de Aplicación No. 543-12

6) Parte supletoria del Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y Servidores Públicos contenidos en la Ley No. 41-08 de Función Pública y en el Reglamento de Aplicación 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública.....53-63

7) Bibliografía.....64

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROLOGO:

La Cámara de Diputados de la República Dominicana desarrolla las atribuciones que le confieren la Constitución de la República, las leyes y su Reglamento Interno, conformando juntamente con el Senado de la República, el Primer Poder del Estado independiente de los demás poderes (Poder Ejecutivo y Poder Judicial).

Como parte del interés del Estado Dominicanos de establecer y mantener el control interno en los términos previstos en la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, del 08 de enero de 2007, que incluye las atribuciones y deberes institucionales, tanto para las instituciones bajo el ámbito de dicha ley como para los servidores públicos, los cuales tienen deberes que cumplir para asegurar la efectividad del control interno institucional, la Cámara de Diputados de la República ha decidido tomar como referencia esta ley para ajustar y/o fortalecer su Sistema de Control Interno.

El reglamento 491-07 de la referida ley, en su artículo 47, incluye entre los elementos del componente ambiente de control, **la integridad y la ética pública**. Este elemento, está directamente vinculado al comportamiento del recurso humano y es vital para la calidad de la gestión pública.

En tal sentido, hemos decidido para una mayor efectividad del conocimiento y cumplimiento del Régimen Disciplinario de los Legisladores y del Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados de la República, compilar en el presente documento ambos regímenes éticos y disciplinarios.

El Régimen Disciplinario de los Legisladores, está contenido en el Reglamento de la Cámara de Diputados de la República, aprobado el 27 de agosto de 2024, mientras que el Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados de la República está contenido en el Reglamento No. 01-06, del 1 de agosto de 2006, de aplicación de la Ley No. 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional.

Este documento compilado del Régimen Ético y Disciplinario de la Cámara de Diputados que hoy ponemos en circulación en manos de cada legislador, funcionario y empleado facilitará el conocimiento y cumplimiento obligatorio en el desempeño de las funciones y responsabilidades legislativas o administrativas.

Licdo. Alfredo Pacheco Osoria
Presidente



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

1) MARCO LEGAL QUE RIGE EL RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICA.

Es deber de todo Diputado, Diputada y su personal de apoyo, funcionario y empleado, cumplir y velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, convenios internacionales, leyes, reglamentos, resoluciones, normas, políticas y manuales, así como denunciar cuando sea de su conocimiento cualquier violación o intento de violación de estas normativas internas o externas.

El Marco legal que rige el Régimen Ético y Disciplinario de la Cámara de Diputados de la República Dominicana está fundamentado en las siguientes disposiciones legales:

a) En la Constitución de la República, proclamada el 27 de octubre de 2024

En los artículos 90 y 142:

Artículo 90.- Bufetes directivos de las cámaras. El 16 de agosto de cada año el Senado y la Cámara de Diputados elegirán sus respectivos bufetes directivos, integrados por un presidente, un vicepresidente y dos secretarios.

1) El presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán, durante las sesiones, poderes disciplinarios y representarán a su respectiva cámara en todos los actos legales;

2) Cada cámara designará sus funcionarios, empleados administrativos y auxiliares de conformidad con la Ley de Carrera Administrativa del Congreso Nacional;

3) Cada cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares, y podrá, en el uso de sus facultades disciplinarias, establecer sanciones que procedan.

Artículo 142.-Función Pública. El Estatuto de la Función Pública es un régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del servidor público de sus funciones.

b) En el Reglamento de la Cámara de Diputados de la República

c) En la Ley No. 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional

d) En el Reglamento No. 01-06, del 1 de agosto de 2006, de aplicación de la Ley No. 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional

2) MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

En la Sesión del Pleno, de fecha 25 de julio de 2013, mediante la Resolución No. 01078, quedó aprobado el Plan Estratégico Institucional 2012-2016 de la Cámara de Diputados de la República dentro del cual quedaron reformados la Misión, Visión y Valores Institucionales, formando parte del comportamiento y el cumplimiento esperado de los legisladores y de su personal de apoyo a la institución:

MISIÓN:

Representar al pueblo dominicano y legislar a su favor, para el desarrollo y consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, así como ejercer el debido control sobre los demás Poderes del Estado.

VISIÓN:

Ser el organismo de representación, legislación y fiscalización, efectivo, dinámico y proactivo, que vela por los intereses y aspiraciones del pueblo dominicano, mediante el ejercicio constitucional de sus funciones y la actuación ejemplar de sus miembros.

VALORES:

- **Participación:** Apertura en el establecimiento de las prioridades legislativas y en la búsqueda de soluciones a las demandas de la ciudadanía.

- **Equidad**: Representación en igualdad de condiciones de todos los sectores que componen la sociedad dominicana.

- **Calidad:** En el ejercicio de las funciones constitucionales y en los servicios brindados.

- **Probidad:** Responsabilidad e integridad en el trabajo parlamentario, transparencia en el uso de los fondos públicos y protección del patrimonio.

- **Pluralidad**: Tolerancia frente a la diversidad de opiniones en los debates y actividades parlamentarias.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS LEGISLADORES



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

3) RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS LEGISLADORES

ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS

La Constitución de la República Dominicana establece en el marco de la elección de los diputados lo siguiente:

Artículo 81.- Representación y composición.

La Constitución de la República Dominicana establece en el artículo 81**,** modificado en la Constitución proclamada el 27 de octubre de 2024, aplicable a partir de las elecciones del año 2028, establece como estará compuesta la Cámara de Diputados.

1) Ciento cincuenta y ocho diputadas o diputados elegidos por circunscripción territorial, en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en proporción a la población electoral registrada por la Junta Central Electoral, sin que en ningún caso sean menos de dos representantes por cada provincia;

2) Cinco diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos. La ley determinará su distribución;

3) Siete diputadas o diputados elegidos en representación de la comunidad dominicana en el exterior. La ley determinará su forma de elección y distribución.

El artículo 83 de la Constitución señala que son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:

1) Acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación sólo podrá formularse con el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del presidente y vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación;

2) Someter al Senado las ternas para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes;

3) Someter al Senado las ternas del Defensor del Pueblo, sus suplentes, que no podrán ser más de dos, y los adjuntos, que no podrán ser más de cinco, con el voto favorable de las dos terceras partes de los presentes.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIPUTADOS

DERECHOS DE LOS DIPUTADOS

El Reglamento de la Cámara de Diputados, **en el artículo 19 sobre los derechos** de los diputados señala lo siguiente:

"Sin perjuicio de las prerrogativas y facultades que les confieren la Constitución de la República y las leyes, los diputados tendrán los derechos siguientes":

1. Participar en los asuntos de su competencia.

2. Actuar con plena libertad en el ejercicio de sus funciones, siempre con apego al sagrado deber de representación del pueblo;

3. Presentar iniciativas de ley y de resolución;

4. Ser invitados a las reuniones de trabajo de las comisiones en que se estén conociendo las iniciativas legislativas de las que sean proponentes.

5. Elegir y ser elegidos como miembros del Bufete Directivo, observando las disposiciones del **artículo 14** de este Reglamento.

6. Agruparse en bloques partidarios;

7. Hacer uso de la palabra en el Hemiciclo;

8. Someter enmiendas a las iniciativas legislativas;

9. Exponer o denunciar los temas de la demarcación territorial de las que fueren electos, del país o internacional que considere oportuno;

10. Ser miembro de hasta cinco comisiones permanentes.

11. Solicitar su inclusión o declinar su participación en las comisiones especiales en las que fueren designados;

12. Participar en la elaboración de los informes de gestión de las comisiones de las que sean miembros;

13. Presentar informes disidentes al informe final de la comisión en que hubieren participado;

14. Representar a la Cámara de Diputados, por mandato del Pleno, de la Presidencia o las comisiones;

15. Defender en el Senado de la República sus iniciativas;

16. Solicitar copias, simples o certificadas, de proyectos de ley, proyectos de resolución, resoluciones, actas, votaciones, y de todo documento de la Cámara de Diputados que resulte de su interés;

17. Recibir por lo menos un informe anual sobre la actividad legislativa y la ejecución presupuestaria de la Cámara de Diputados;

18. Requerir informes sobre las diligencias realizadas por las comisiones, o precisiones sobre el contenido de los informes o sobre otro asunto sometido a debate;

19. Contar con una página personal dentro de la dirección de Internet de la Cámara de Diputados;

20. Solicitar la suspensión de la sesión cuando se perciba alteración del orden en la grada del Hemiciclo.

DEBERES DE LOS DIPUTADOS

El Artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la República, establece los siguientes deberes que tienen los diputados:

1. Prestar juramento para su incorporación a la Cámara de Diputados;
2. Conocer y cumplir la Constitución de la República, las leyes y el presente Reglamento;
3. Ejercer la representación del pueblo dominicano;
4. Defender y fortalecer la credibilidad e institucionalidad del Congreso Nacional;
5. Asistir a la hora fijada para las sesiones del Pleno y las reuniones de las comisiones, y permanecer en ellas hasta su término, observando las disposiciones del artículo 192 de este Reglamento;

6. Cumplir con las responsabilidades que se les asignen en las comisiones de las cuales formen parte, en el plazo fijado en este Reglamento o por la Cámara de Diputados, salvo excusa legítima;

7. Presentar a los Plenos informes por escrito de las misiones o representaciones que les fueren encomendadas;

8. Respetar los juicios emitidos por los demás diputados en los debates en el Hemiciclo;

9. Evitar, en sus intervenciones, toda alusión personal mortificante, debiendo conservar en todo momento la moderación y decoro propios de la alta dignidad de que está investido;

10. Actuar con responsabilidad y ética en la elaboración y presentación de sus iniciativas, garantizando la integridad y autenticidad de sus propuestas;

11. Mantener la solemnidad en el Salón de la Asamblea Nacional, el Hemiciclo, los salones de comisiones y en todas las áreas del Congreso Nacional;

12. No divulgar informaciones confidenciales tratadas en las comisiones de trabajo;

13. Hacer uso adecuado de los equipos instalados en el Hemiciclo, salones de comisiones, en su oficina, u otras áreas del Congreso Nacional;

14. Mantener los equipos o activos asignados a sus oficinas dentro de la sede de la Cámara de Diputados;

15. Rendir cuenta de su gestión anualmente a sus electores y depositarla por ante la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados;

16. Depositar su declaración jurada de bienes conformes lo dispone la Constitución de la República y la ley.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS LEGISLADORES

El reglamento de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, en su título IX del Régimen Disciplinario establece los siguientes artículos: Artículo No. 199 y Artículo No. 200 que deben ser observados y de cumplimiento obligatorio por todos los Diputados y Diputadas que conforman esta cámara legislativa:

Artículo 201. Órganos del Régimen Disciplinario. La estructura del Régimen Disciplinario de la Cámara de Diputados estará integrada por los órganos que se describen a continuación:

1) La Comisión Instructora;

2) El Consejo de Disciplina;

3) El Pleno de la Cámara de Diputados.

Artículo 202.- Comisión **Instructora**. La Comisión Instructora es el órgano competente para realizar las investigaciones de las faltas cometidas por los diputados en el ejercicio de sus funciones. Estará integrada por tres diputados designados por el Pleno, por un período de dos años.

Artículo 203.- Investigación y actuaciones probatorias. La Comisión Instructora realizará una investigación objetiva y podrá practicar las actuaciones probatorias que considere pertinentes para la determinación y comprobación de los hechos. Además, podrá recibir las declaraciones del presunto infractor y realizará las indagatorias que se desprendan de la denuncia o comunicación que motivó el inicio del procedimiento sancionador.

Párrafo. - Los miembros de la comisión podrán inhibirse o ser recusados por las causales que establece el ordenamiento jurídico, conforme al procedimiento sancionador que organiza este Reglamento.

Artículo 204. Derecho de información. La Comisión Instructora comunicará el inicio de la investigación al presunto infractor dentro del plazo de las cuarenta y ocho horas de su apoderamiento.

Párrafo. - En el curso de la investigación, el presunto infractor tendrá derecho a presentar los alegatos y pruebas pertinentes que correspondan.

Artículo 205. Inhibiciones y recusaciones. Las inhibiciones y las causales de recusación serán conocidas por el Consejo de Disciplina, quien podrá resolverlas mediante decisiones motivadas.

Artículo 206. Plazo máximo de la investigación. La Comisión Instructora deberá concluir las investigaciones en un plazo máximo de treinta días, contados a partir de su apoderamiento, y podrá presentar al Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados un acto de no ha lugar en beneficio del presunto infractor o un acto de acusación en contra del mismo.

Párrafo I.- Cuando la Comisión Instructora presente acusación ante al Consejo de Disciplina, también presentará los medios de prueba que sustenten la acusación.

Párrafo II.- En caso de que la Comisión Instructora no concluya la investigación o no presente acto de acusación en el plazo indicado, se considerará desestimada la investigación.

Párrafo III.- Los plazos siempre se contarán en días, a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación o notificación del acto que los comunique; excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y feriados.

Artículo 207.- Faltas. El Consejo de Disciplina aplicará el régimen sancionador previsto en el presente título cuando un diputado incurra en alguna de las faltas siguientes:

1) La violación al ordenamiento jurídico del Estado;

2) La negligencia reiterada de un miembro del Bufete Directivo en la realización de su obligación de cumplir y hacer cumplir este Reglamento;

3) La desobediencia a un llamado al orden hecho por el presidente o quien dirija los debates;

4) La inasistencia a las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados sin excusa legítima;

5) La inasistencia de un diputado que ha agotado una licencia y no acude a ocupar su puesto después de haber sido llamado formalmente por escrito;

6) El irrespeto a la Cámara de Diputados o ultraje a alguno de sus miembros, incluidos los colaboradores de las cámaras legislativas;

7) Los daños, destrucción o uso indebido de los bienes de la Cámara de Diputados, efectuados con intención dolosa;

8) El desempeño de funciones incompatibles con la condición de legislador;

9) La falta de probidad y la violación grave a las normas éticas requeridas a los legisladores;

10) El porte o uso de armas o artefactos peligrosos dentro del recinto de la Cámara de Diputados;

11) Ejercer agresión física dentro del recinto de la Cámara de Diputados;

12) Incitar o promover acciones o manifestaciones violentas contra los diputados, la sede o las dependencias del Congreso Nacional;

13) Difamar o desacreditar a la Cámara de Diputados o alguno de sus miembros, por cualquier medio verbal o escrito, ya sea físico o digital.

Párrafo. - Cuando se haya comprobado que un diputado ejerce un empleo público incompatible con la función de diputado, se le conminará a que opte por una de las dos funciones y en caso de no obtemperar se iniciará el proceso disciplinario correspondiente en un plazo de treinta días.

Artículo 213.- Consejo de Disciplina. El Consejo de Disciplina es el órgano competente para conocer y sancionar las faltas cometidas por los diputados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 214.- Integración del Consejo de Disciplina. El Consejo de Disciplina estará integrado por siete diputados propuestos por la Comisión Coordinadora y ratificados por el Pleno de la Cámara de Diputados, por un período de dos años.

Párrafo IV.- Si uno o varios diputados miembros del Consejo de Disciplina son sometidos ante el mismo, el Pleno de la Cámara de Diputados los sustituirá interinamente hasta la conclusión del proceso disciplinario. En caso de que resultare exento de responsabilidad asumirá sus funciones dentro del Consejo, de lo contrario se designará un diputado para completar el periodo para el cual fue designado.

Artículo 215.- Decisión. La decisión del Consejo de Disciplina deberá estar debidamente motivada, en hecho y derecho. También indicará los medios de prueba y las medidas de instrucción que se hayan practicado y, finalmente, la sanción adoptada.

Artículo 216.- Principios del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador se desarrollará al amparo de los principios de este Reglamento y sus normas complementarias.

Artículo 217.- Inicio del procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador será iniciado por la Comisión Instructora, ya sea de oficio o a requerimiento de parte interesada.

Artículo 218.- Comunicación de la decisión. El Consejo de Disciplina tramitará su decisión motivada al presidente de la Cámara de Diputados, el cual impartirá las órdenes necesarias para que sea debidamente ejecutada, y lo comunicará al Pleno en un plazo no mayor de quince días, a contar de la fecha en que reciba el dictamen.

Párrafo. - Cuando el Consejo de Disciplina resuelva a favor de la inocencia del diputado encausado, el presidente de la Cámara de Diputados dispondrá, previa notificación, que se dé publicidad a dicho dictamen en varios periódicos de difusión nacional y los medios de los que dispone la Cámara de Diputados, con el objeto de rehabilitar cualquier daño a la reputación de aquel.

Artículo 208.- Sanciones. El Consejo de Disciplina podrá imponer las sancione siguientes:

1) Amonestación privada;

2) Censura pública;

3) Privación de representar a la Cámara en eventos nacionales e internacionales por el tiempo que el Consejo de Disciplina determine;

4) Suspensión de su participación en las comisiones de trabajo a las que pertenezca por el tiempo que se determinare; para la imposición de esta sanción será necesario el previo conocimiento y ratificación por parte del Pleno;

5) Privación del disfrute de pago de viáticos por el tiempo que se determine;

6) Recomendación al Pleno de la Cámara de Diputados para que inicie el proceso constitucional establecido en el numeral 1 del artículo 83 de la Constitución de la República.

Artículo 209.- Responsabilidad penal o civil. El régimen sancionador que regula el presente título no eximirá, en ningún caso, de la responsabilidad penal o civil en la que pudiere haber incurrido el diputado infractor y que será conocida por ante los tribunales del orden judicial, de conformidad con los procedimientos que establezcan la Constitución de la República y las leyes.

Artículo 210.- Protección a la función legislativa. Los diputados ejercerán plenamente las competencias que les atribuye el ordenamiento jurídico del Estado, por consiguiente, no podrán ser privados de su libertad durante la legislatura. Sin embargo, podrán ser aprehendidos previa autorización del Pleno de la Cámara de Diputados, en virtud de una solicitud de la autoridad judicial competente o en caso de que sean sorprendidos en la comisión de un crimen.

Párrafo I.- La inmunidad parlamentaria a que se refiere el presente artículo solo será retirada a los miembros de la Cámara de Diputados en respuesta al requerimiento hecho a tales fines.

Párrafo II.- La solicitud de retiro de la inmunidad recibida en la Cámara de Diputados será conocida en el orden del día siguiente a la fecha en que fuere recibida. El Pleno podrá adoptar la decisión que considere pertinente o requerir las recomendaciones del Consejo de Disciplina para decidir respecto a la autorización de la aprehensión del diputado.

Párrafo III.- La decisión tomada por el Pleno será comunicada a la autoridad judicial competente, dentro de un plazo de quince días.

Artículo 211.- Apertura expediente disciplinario. La apertura de un expediente disciplinario será acordada por el Consejo de Disciplina, por iniciativa propia, a propuesta del Pleno, de alguno de los órganos políticos o de un miembro de la Cámara de Diputados, cuando se aprecien indicios de responsabilidad disciplinaria de uno o varios diputados, con el fin de aclarar la existencia o no de dicha responsabilidad. El acuerdo que adopte el Consejo de la apertura o no del expediente habrá de estar debidamente motivado.

Artículo 212.- Normas de procedimiento obligatorias. Las normas de procedimiento previstas en los artículos del 203 al 206 de este Reglamento serán de necesaria aplicación a los expedientes disciplinarios que se sigan, para depurar las responsabilidades derivadas de las faltas a que se refieren los numerales 1), 2), 7), 8), 9) y 10) del artículo 207. Para las faltas restantes el Consejo de Disciplina podrá resolver

directamente con las pruebas que obren en su poder, previa audiencia, si el diputado encausado la solicita.

Artículo 219.- Recurso contra las decisiones del Consejo de Disciplina. Las decisiones del Consejo de Disciplina podrán ser objeto del recurso de reconsideración ante el mismo Consejo de Disciplina.

Artículo 220.- Competencias del Pleno. El Pleno de la Cámara de Diputados será competente para conocer del recurso jerárquico que contra las resoluciones adoptadas por el Consejo de Disciplina interponga el presunto infractor, para lo cual contará con un plazo de veinte días, a partir de la notificación de la resolución.

Párrafo I.- Las impugnaciones contra la decisión del Consejo de Disciplina serán incluidas en el orden del día, para su conocimiento.

Párrafo II.- El Pleno podrá enviar a estudio de una comisión especial las impugnaciones para que, en el plazo máximo de treinta días a partir de su apoderamiento, rinda el informe y proponga la resolución correspondiente

TÍTULO XIII

DISPOSICIONES ESPECIALES

El Reglamento de la Cámara de Diputados en el capítulo II De La Pérdida de Investidura De Los Diputados y el capítulo I De Las Sesiones establece:

Artículo 24.- Acusación por inasistencia. En ejecución de lo dispuesto por la Constitución de la República, los diputados que al término de cada legislatura ordinaria no acumulen los porcentajes de asistencia mínimos establecidos en el artículo 59 de este Reglamento, serán acusados ante el Senado de la República por incumplimiento de funciones.

Párrafo I.- El informe de acusación será presentado al Pleno de los diputados por la Comisión Instructora durante los primeros quince días de la legislatura ordinaria que siga a aquella en la que se efectuó el incumplimiento de asistencia.

Párrafo II.- El Pleno, después de recibir el informe de la Comisión Instructora acerca del incumplimiento, decidirá sobre la acusación de conformidad con las disposiciones de la Constitución de la República.

Párrafo III.- Si la Comisión Instructora no presenta la acusación en el plazo establecido en el párrafo I de este artículo, el presidente o un diputado podrá presentarla; la cual deberá ser conocida por el Pleno.

Artículo 59.- **Asistencia**. La asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno de la Cámara de Diputados es obligatoria. Los diputados deberán registrar una asistencia mayor o igual al ochenta por ciento de las sesiones celebradas en las legislaturas ordinarias.

Párrafo I.- En caso de no asistir a una o varias sesiones por circunstancias que justifiquen su inasistencia deberán notificarlo a la Presidencia, vía Secretaría General Legislativa, que lo hará de conocimiento al Pleno en la sesión celebrada inmediatamente después de la o las ausencias.

Párrafo II.- Sin la constancia de tal aviso se considerará que el diputado ha incurrido en ausencia injustificada, y la Secretaría General Legislativa lo hará notificar a la Presidencia ante el Pleno en la sesión siguiente.

Párrafo III.- Los nombres de los diputados que han incurrido en ausencia injustificada se publicarán en los portales y medios de información institucional de que se disponga. La relación de estos nombres será remitida a la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados para fines de seguimiento y ponderación, conforme lo dispone la Constitución de la República

Artículo 60.- Excusa legítima. Constituyen excusa legítima que justifican ausencia las condiciones siguientes:

1) Indisposición por enfermedad o por duelo familiar, siempre que la ausencia no exceda de una sesión. A partir de este plazo el diputado debe notificarlo a la Cámara de Diputados o se considerará que ha incurrido en ausencia injustificada;

2) Realización de trabajos que les hayan sido encargados en las respectivas comisiones a que pertenece el diputado, siempre que haya constancia de tal situación en las actas de las comisiones correspondientes y la misma se comunique por escrito al Pleno vía la Secretaría General Legislativa;

3) Por encontrarse en representación de la Cámara de Diputados, siempre que haya constancia escrita y documentada de tal encargo y la misma se comunique al Pleno vía la Secretaría General Legislativa.

Párrafo. - A partir de la cuarta excusa que de manera consecutiva haya presentado un diputado, estas serán remitidas al Consejo de Disciplina a los fines de su ponderación, validación y posible sanción que se aplicará de manera gradual de conformidad con los numerales 1), 2) y 5) del artículo 208 de este Reglamento.

Artículo 61.- Licencias. Las solicitudes de licencia se harán por escrito. Solo el Pleno, por mayoría de votos, podrá conceder licencias a los diputados, las cuales no excederán los treinta días, a excepción de las licencias por maternidad que serán otorgadas de conformidad con la ley.
Párrafo. - El Pleno no concederá licencia a los diputados sin motivo legítimo ni al mismo tiempo a más de la cuarta parte de la totalidad de sus miembros.

RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO
DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

4) RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA LEY NO. 02-06, DEL 10 DE ENERO DE 2006, DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL.

La Ley No. 02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional, en su Título I sobre los Principios Fundamentales, Capítulo I De los Objetivos, dispone:

Artículo 1.- La presente Ley crea el estatuto de la función pública administrativa legislativa como el instrumento de derecho positivo, regulador de las relaciones de trabajo entre el Estado y los agentes administrativos del Congreso Nacional. En consecuencia, reconoce:

a) Los derechos y obligaciones que el Estado, a través del Congreso Nacional, contrae con su personal administrativo, e instituye principios, mecanismos e instrumentos para garantizar la imparcialidad, la eficiencia, el adecuado desempeño, la ética, la honestidad y la moral pública;

b) Las bases para la seguridad en el empleo de los agentes del Congreso Nacional, que les permita atender a plenitud el servicio que prestan y su desarrollo profesional a través de la capacitación permanente;

c) Los soportes institucionales de apoyo a la función primaria y sustantiva del legislador.

DE LOS PRINCIPIOS LA LEY NO. 002-06 DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL CONGRESO NACIONAL

En el Capítulo II De los Principios, en el artículo 2. Señala que la función pública administrativa en el Congreso Nacional está regida por un conjunto ordenado y sistemático de principios fundamentales que constituyen la esencia del régimen jurídico que la rige, a saber:

a) **Del mérito personal**: Reconoce el derecho que asiste a todo dominicano para que sus méritos profesionales y técnicos permitan acceder a una posición en la Administración del Congreso Nacional;

b) **De la igualdad de oportunidades**: Confiere a todos los dominicanos el derecho de ingresar a una función administrativa en el Congreso Nacional libre de discrimen político, religioso, social, de género o de otra índole;

c) **De la libre competición**: Consagra la obligación de cubrir las plazas vacantes mediante concurso basado en el mérito personal de los participantes y sujeto a las medidas de publicidad establecidas para el conocimiento público;

d) **Del jus-variandi**: Facultad reconocida al Congreso Nacional de modificar las condiciones de trabajo por conveniencia del servicio u otro interés institucional, sin lesionar económicamente al agente, asignándole una posición de características similares o análogas;

e) **De la estabilidad**: Derecho que confiere el Congreso Nacional al agente, de manera que pueda permanecer en el cargo hasta tanto el ejercicio de sus funciones cumpla con las provisiones de esta ley y sus reglamentos;

f) **Del desarrollo**: El Congreso Nacional, al conferirle al agente la condición de carrera, contrae la responsabilidad de promover el incremento de sus conocimientos, habilidades y destrezas para su adecuación a los modernos modelos de gestión pública;

g) **De la justa remuneración**: Los agentes administrativos del Congreso Nacional recibirán un salario en base al principio laboral de igual paga por igual trabajo, fundamentado en una política salarial equitativa, coherente y sin distorsiones;

h) **De las promociones graduales**: Los cargos de niveles jerárquicos superiores serán cubiertos por ascenso basados en el principio de mérito personal, mediante concursos de libre competición cerrados;

i) **De la imparcialidad**: Obligación de todo agente de carrera del Congreso Nacional, actuar con absoluta imparcialidad en el ejercicio de la función pública administrativa que se le haya conferido;

j) **De la evaluación del desempeño:** Obliga al agente del Congreso Nacional a someterse a evaluación del desempeño de servicios de acuerdo a esta ley y sus reglamentos, de cuyos resultados dependerá su promoción, estabilidad y desvinculación en la institución;

k) **De la legalidad**: Procura la protección jurídica de los intereses del agente reconocidos por esta ley;

l) **Del debido proceso de ley**: Consagra el respeto a los procedimientos como vía de derecho conferida al agente en los casos en que el Congreso Nacional le haya lesionado un interés jurídicamente protegido;

m) **De la recurribilidad:** Es la vía de derecho concedida al agente cuando una decisión de la autoridad jerárquicamente correspondiente le haya ocasionado un presunto perjuicio al violar una situación jurídicamente protegida;

n) **De lealtad y motivación institucional:** Establece el deber del agente de fomentar la integridad, motivación, lealtad institucional, espíritu de servicio público y consagración al trabajo; debiendo ejercer sus funciones apegados a los más elevados criterios de fortalecimiento institucional;

ñ) **De sistematización del trabajo**: Procura crear en el agente la debida concienciación de promover la sistematización y simplificación de los procesos operativos de la institución para el debido incremento de la eficiencia y eficacia de los servicios a cargo del Congreso Nacional para satisfacción de los ciudadanos usuarios;

o) **Del modelo gerencial**: Sustenta la necesidad de adoptar un modelo de gestión moderno y de acuerdo con los cambios para mejor desarrollo técnico administrativo del Congreso Nacional;

p) **De la flexibilización organizacional y jerárquica**: Fundamenta el replanteamiento de la administración del Congreso Nacional con miras a erradicar la dualidad funcional y lograr su reconstrucción para reducir los niveles jerárquicos propiciando un proceso de tomas de decisiones más efectiva;

q) **De la neutralidad**: Garantiza un conjunto de deberes y obligaciones inherentes a las funciones puestas a cargo del agente para que sean ejercidas con absoluta neutralidad, independencia e imparcialidad.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DEL RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

De la Ley No. 02-06, del 10 de enero de 2006, de Carrera Administrativa del Congreso Nacional, establece el Reglamento No. 01-06, del 1 de agosto de 2006 de aplicación los siguientes títulos, capítulos y artículos que desarrollan el Régimen Ético y Disciplinario son de conocimiento y cumplimiento obligatorio de todos los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados:

TÍTULO XI

DEL RÉGIMEN ÉTICO Y DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I

De las Finalidades

Art. 134.- Los funcionarios y empleados públicos que desempeñen funciones en el Congreso Nacional, en virtud del artículo 78 de la Ley, deberán ajustar su conducta a los principios éticos y disciplinarios previstos, los cuales deben fundamentar el ejercicio de la función pública de apoyo al legislador.

Art. 135.- El Congreso Nacional establece como una cuestión de alto interés institucional, y en consecuencia con obligatoriedad de cumplimiento, el que cada empleado y funcionario observe un comportamiento personal intachable, acorde con el alto nivel de la institución en que labora, de tal manera que esto se manifieste al través de:

a) Su dedicación plena el trabajo bajo su responsabilidad;

b) El desarrollo de iniciativas para mejorar su labor cotidiana y contribuir con el mejoramiento y desarrollo del Congreso Nacional;

c) Una actitud disciplinada ajustada a los principios de honestidad, ética y buenas costumbres, e inclinada a los principios de buenas relaciones humanas y servicio en el trabajo;

d) Colaboración desinteresada con las instancias superiores, y con sus compañeros de trabajo en general;

e) Respeto absoluto a las normas y procedimientos vigentes en todo el Congreso Nacional y en la Cámara en que labore, así como, a las instrucciones y órdenes regulares de su superior inmediato y de todas las instancias superiores;

f) Mantenerse en su oficina o lugar de trabajo y no usar el escritorio o lugar de trabajo de otro empleado;

g) Evitar las visitas sociales innecesarias a otras oficinas o dependencias y los recorridos innecesarios por las áreas de acceso y pasillos de las oficinas y salones de reuniones;

h) Abstenerse de abrir cartas, gavetas, archivos y documentos en general, sin estar debidamente autorizados;

i) Ser siempre cortes y respetuoso con sus compañeros de labores, con el público y con relacionados en general;

j) Usar siempre un lenguaje correcto con sus compañeros de labores, con el público y con relacionados en general;

k) Usar y mantener siempre ropa adecuada en su trabajo, respetando las normas de vestimenta establecidas;

l) No ingerir alimentos o bebidas en las áreas de oficinas o pasillos, excepto en aquellas destinadas para tales fines;

m) Usar, cuidar y proteger los bienes de la Cámara a que pertenezca y puestos bajo su responsabilidad, debiendo responder por los mismos ante sus superiores;

n) Usar los vehículos, equipos, instalaciones y materiales en general propiedad de la cámara en que labore, de manera exclusiva para el desarrollo de sus labores y no usar dichos recursos para satisfacer necesidades personales.

CAPÍTULO II

De las Responsabilidades

Art. 136.- El Congreso Nacional, a través de la Cámara correspondiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 80 y 81 de la Ley, tiene la obligación de reparar los daños provocados a los agentes, por una acción antijurídica que le sea imputable; y la responsabilidad civil es extensiva, mancomunada y solidaria a los funcionarios que por su conducta dolosa o gravemente culposa hubieren dado lugar al acto ilegal o irregular.

CAPÍTULO III

De los Deberes Generales

Art. 137.- Son deberes de todos los servidores del Congreso Nacional, sean de carrera o no, consagrados en el artículo 82 de la Ley, los siguientes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, y manuales, emanados de autoridades competentes;

b) Desempeñar con interés, dedicación, eficiencia, honestidad e imparcialidad las funciones de su cargo, cumpliendo las disposiciones del presente Reglamento y evitando la comisión de faltas disciplinarias;

c) Obedecer y respetar a los superiores jerárquicos en sus actuaciones legítimas y procedentes;

d) Dar un tratamiento cortés y considerado a sus superiores, compañeros y subordinados y compartir sus tareas con espíritu de solidaridad y unidad de propósito;

e) Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cortesía debidas;

f) Realizar las tareas que les sean confiadas y responder al debido ejercicio de la autoridad que les haya sido otorgada y de la ejecución de las órdenes que impartan o reciban, sin que en ningún caso queden exentos de la responsabilidad que les incumbe, y por la que corresponde a sus subordinados;

g) Guardar la reserva y confidencialidad que requieren los asuntos relacionados con su trabajo, o con especiales intereses del Congreso Nacional, en razón de su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, aún después de haber cesado en el cargo y sin perjuicio de la obligación de denunciar ante su superior jerárquico cualquier hecho delictuoso o falta disciplinaria;

h) Vigilar y salvaguardar los intereses, valores, bienes, equipos y materiales del Congreso Nacional, principalmente los que pertenezcan a su área de trabajo o estén bajo su responsabilidad;

i) Rechazar las proposiciones de cohecho o soborno que reciban y denunciarlas;

j) Cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones y responsabilidades;

k) Atender debidamente las actividades de formación, adiestramiento y actualización de sus conocimientos y efectuar las prácticas y los trabajos que tales actividades conlleven;

l) Responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles confiados a su guarda o administración, procurar con esmero su conservación y rendir debida y oportuna cuenta de su utilización, tramitación y cuidado;

m) Poner en conocimiento del superior jerárquico los hechos que puedan perjudicar al Congreso Nacional y desarrollar las iniciativas que sean útiles para el mejoramiento del servicio;

n) Evitar los privilegios y discriminaciones por motivo de filiación política, religión, raza, condición social, parentesco u otros criterios que sean incompatibles con los derechos humanos y con el mérito personal;

ñ) Actuar con neutralidad político partidarista en el desempeño de sus funciones;

o) No incurrir en las faltas disciplinarias que se señalan en el presente Reglamento;

p) Ejercer con rectitud, honestidad e integridad los derechos reconocidos por la Constitución de la República, la Ley y otras disposiciones legales y reglamentarias;

q) Tener un comportamiento acorde con los principios y normas que constituyen la esencia de los tratados de moral social, los instrumentos y vías de relaciones humanas civilizadas, reconocidos y sancionados por la mejor cultura del pueblo dominicano;

r) Ajustarse a que lo decidido por los plenos de las cámaras, así como de las de sus diferentes órganos, esté fielmente plasmado en las leyes, resoluciones, informes y documentos emanados de ellos.

Párrafo. - Todos los derechos de que trata el presente artículo, resultan de interés para preservar la eficiencia y moral pública del Congreso Nacional, por lo que resulta perentorio su fiel cumplimiento.

CAPÍTULO IV

De las Prohibiciones

Art. 138.- A los servidores del Congreso Nacional, en virtud del artículo 83 de la Ley, les está prohibido incurrir en los actos que la Ley califica como faltas disciplinarias, como son:

a) Realizar actividades ajenas a sus labores regulares durante la jornada de trabajo;

b) Abandonar o suspender sus labores sin aprobación previa de autoridad competente;

c) Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de los servicios que les corresponden;

d) Dar noticias o informaciones sobre asuntos de la institución, cuando no estén facultados para hacerlo;

e) Dedicarse, tanto en el servicio como en la vida privada, a actividades que puedan afectar la imagen del Congreso Nacional;

f) Observar una conducta que pueda afectar la reputación y dignidad del Congreso Nacional;

g) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a sus cargos;

h) Solicitar, aceptar o recibir ventajas o beneficios en dinero o en especie, por facilitar a terceros la adquisición de bienes y servicios del Congreso Nacional;

i) Recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos previstos en las leyes o reglamentos;

j) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón de los cargos públicos que desempeña;

k) Intervenir, directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Congreso Nacional y en la obtención de concesiones o beneficios que impliquen privilegio oficial en su favor, salvo en los casos en que por mandato de la Ley los deban suscribir;

l) Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas o sustancias estupefacientes;

m) Incurrir en las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria, o que resulten del buen entendimiento y observancia de la ética social y administrativa;

n) Valerse de influencias jerárquicas para propiciar y/o conminar a relaciones íntimas y/o sentimentales con compañeros de trabajo;

ñ) Cometer actos lesivos a la moral o que promuevan el escándalo público en la institución o cualquiera de sus dependencias, dentro o fuera del horario normal de trabajo;

o) Requisar, sustraer o copiar informaciones de exclusivo uso o manejo de otros compañeros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior inmediato, cuando éstos fueren competentes para darla;

p) Usar lenguaje soez, vulgar o lascivo, con o sin fines ofensivos dentro de la institución;

q) Usar vestimentas escandalosas o que no correspondan a la naturaleza del lugar donde se labora.

Párrafo I.- No podrán prestar servicios en una misma unidad de trabajo del Congreso Nacional, los cónyuges y quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive.

Párrafo II.- Ninguna persona podrá ser designada para desempeñar más de un cargo dentro del Congreso Nacional, en forma simultánea, salvo si se tratare de labores docentes o de investigaciones y las de carácter honorífico no afectadas por incompatibilidad legal.

Párrafo III. - También se prohíbe a los funcionarios y empleados del Congreso Nacional en el ejercicio de sus funciones, organizar o dirigir demostraciones ni pronunciar discursos o distribuir propaganda de carácter político, ni solicitar fondos para los mismos fines, dentro de las oficinas del Congreso Nacional.

Párrafo IV.- Queda prohibida también la celebración o promoción de reuniones de servidores del Congreso Nacional, en horas laborables, que interrumpan las labores o el funcionamiento total o parcial de las oficinas, salvo el caso de que tales reuniones sean convocadas por los funcionarios directivos de las mismas para tratar asuntos laborales.

Párrafo V.- Queda terminantemente prohibida la intervención de personas ajenas o extrañas a las oficinas del Congreso Nacional, en cualquier reunión dentro de las mismas, con fines de propaganda, agitación, proselitismo o actividades de cualquier carácter o naturaleza.

Art. 139.- Los funcionarios o empleados del Congreso Nacional que provoquen o auspicien reuniones que conlleven interrupción de las labores, serán destituidos de sus cargos.

Art. 140- Se prohíbe la suspensión voluntaria de actividades en las oficinas del Congreso Nacional, cual que sea la causa que se alegue o invoque para las mismas. Los empleados que, por palabras, escritos, comunicados o proclamas, inciten a la suspensión de actividades o la provoquen, serán separados de sus cargos.

CAPÍTULO V

De la Incompatibilidad de Funciones

Art. 141.- Queda establecido, según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley, que las siguientes actividades son incompatibles con las funciones permanentes y remuneradas de los funcionarios y empleados del Congreso Nacional:

a) Desempeñar otro cargo remunerado y permanente dentro del Congreso Nacional, excepto la actividad cultural, docente y de investigación científica y administrativa, y la participación en juntas, comités, grupos de trabajo u otras formas de acción conjunta, que por mandato de la Ley o de los reglamentos, corresponda a determinados funcionarios por la naturaleza de sus responsabilidades;

b) Integrar, siendo servidor permanente de un cargo del Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas u otro órgano de naturaleza contencioso administrativo o judicial;

c) Participar en actividades oficiales en las que el empleado o funcionario del Congreso Nacional resulte ser juez y parte a la vez;

d) Participar en actividades oficiales en las que el empleado o funcionario tenga algún interés económico, patrimonial o de índole político, que en algún modo ponga en contradicción una dualidad de atribuciones, derechos o intereses;

e) Ejercer, participar o desempeñar cometidos que conforme a la Constitución o a las leyes resulten moral o administrativamente contradictorios, o de notoria y lógica inconveniencia para el Congreso Nacional o la sociedad nacional;

f) Desempeñar cualquier cargo, profesión o actividad que menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del empleado o funcionario;

g) Percibir pensión del Estado; y

h) Las demás incompatibilidades que se establezcan por ley o Reglamento.

Art. 142.- La aceptación de un nuevo cargo remunerado, incompatible con el que se esté ejerciendo, implica la renuncia de éste, salvo en los casos de excepciones contempladas en la Constitución, la Ley o en los reglamentos.

CAPÍTULO VI

Del Régimen Disciplinario

Art. 143.- La disciplina es el medio a utilizar para sancionar una falta o violación a las normas laborales de comportamiento y respeto, que se aplica con la idea de corregir, moldear o fortalecer al empleado para lograr las metas de la institución. El castigo que esto conlleva debe ser un medio para reeducar el agente en falta y evitar la repetición del hecho.

Art. 144.- De acuerdo a lo previsto en el artículo 86 de la Ley, se establece que el régimen disciplinario es el instrumento jurídico rector de la orientación de los servidores públicos adecuado a las características de cada organización estatal y, por tanto, la función de control que ejerce la potestad disciplinaria, además de la defensa del interés público, garantiza el cumplimiento de los cometidos sociales del Estado, al pautar la conducta funcionarial de sus agentes dentro del marco de los principios éticos, de moral pública y de legalidad.

Art. 145.- El funcionario que ostenta la potestad disciplinaria es el Presidente de cada Cámara Legislativa y por delegación, todo encargado de departamento, división, unidad, sección u oficina del Poder Legislativo, sobre el personal bajo su dependencia.

Para aplicar la disciplina debe ajustarse a un régimen o norma de aplicación, la cual, en cada caso, debe ser justa y aleccionadora.

Art. 146.- En virtud de lo establecido en el artículo 88 de la Ley, el régimen disciplinario tiene los fines siguientes:

a) Contribuir a que los funcionarios cumplan leal, asidua y honestamente sus deberes y responsabilidades, a fin de alcanzar la mayor eficiencia del servicio público;

b) Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se consagran en favor de los empleados y del Congreso Nacional;

c) Procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a estrictos criterios de legalidad, equidad y objetividad;

d) Proveer los recursos y vías de acción necesarios para la salvaguarda de los derechos y legítimos intereses de los servidores del Congreso Nacional.

Art. 147- A los efectos de asegurar el cumplimiento de los objetivos indicados, en este Reglamento se consagran las normas y los procedimientos referentes al sistema de calificación las faltas, graduación de las sanciones, circunstancias atenuantes y agravantes de las faltas, órganos disciplinarios, acciones, recursos y garantías, que integran el citado régimen disciplinario.

CAPÍTULO VII

De las Faltas Disciplinarias

Art. 148.- Se entiende por falta disciplinaria, cualquier violación a los deberes, prohibiciones, incompatibilidades e inhibición previstos en la Ley, el presente Reglamento u otras normas emanadas de autoridades competentes, a las que se hallaren sujetos los servidores del Congreso Nacional.

Art. 149.- Según la gravedad de la falta que se cometa, el artículo 91 de la Ley prevé que las autoridades competentes, en los términos del presente Reglamento, podrán imponer las siguientes sanciones:

a) Amonestación oral;

b) Amonestación escrita;

c) Multa del 5 al 15% del sueldo de un (1) mes de trabajo;

d) Multa del 16 al 25% del sueldo de un (1) mes de trabajo;

e) Destitución.

Párrafo. - Todas las sanciones, excepto la de amonestación oral, serán anotadas en el historial personal del empleado sancionado, y sus documentos básicos serán anexados a los expedientes respectivos.

Art. 150.- Son faltas de primer grado, cuya comisión da lugar a una amonestación oral, las siguientes:

a) Incumplir la jornada de trabajo, acumulando en un (1) mes entre veinte (20) y sesenta (60) minutos de tardanza a la entrada o previo a la salida, sin justificación valedera;

b) Descuidar el rendimiento y la calidad del trabajo, bien sea realizándolo con negligencia o tratando descortésmente a los compañeros de trabajo, a sus autoridades o al público que le requiere un servicio que el empleado estuviera obligado a dar;

c) Proponer o establecer de manera consciente trámites innecesarios en el trabajo;

d) Descuidar la guarda, vigilancia y orden de los bienes, materiales y equipos puestos bajo su cuidado;

e) Suspender las labores sin la autorización previa de la autoridad competente;

f) Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con las de su cargo o con las de otros compañeros, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente; y

g) Cualquiera de los otros hechos u omisiones similares por su naturaleza y gravedad a los anteriores, para los que no estén previstas sanciones mayores.

Art. 151.- Son faltas de segundo grado cuya comisión da lugar a una amonestación escrita, las siguientes:

a) Reincidir en cualquiera de las faltas calificadas como de primer grado;

b) Dejar de asistir al trabajo durante un (1) día sin aprobación previa de la autoridad competente;

c) Recomendar el nombramiento o un tratamiento privilegiado en favor de alguna persona, al margen de los procedimientos establecidos por las normas de carrera;

d) Incumplir la jornada de trabajo, acumulando en un (1) mes entre sesenta y uno (61) y ciento veinte (120) minutos de tardanza, sin justificación;

e) Procurar o permitir que otro empleado marque o firme en su lugar el medio de control de asistencia al trabajo establecido, o incurrir conscientemente en ese mismo hecho en lugar de otro empleado;

f) Incurrir en cualquier otro hecho u omisión calificable como falta de segundo grado y que no amerite una sanción mayor.

Art. 152.- Son faltas de tercer grado, cuya comisión da lugar a imponer multa del 5% al 15% del sueldo de un (1) mes, las siguientes:

a) Reincidir en cualquiera de las faltas establecidas como de segundo grado;

b) Dejar de evaluar y calificar los servicios de sus subalternos dentro de los plazos oficialmente establecidos;

c) Incumplir los deberes no clasificados como faltas del primer y segundo grado, ejercer indebidamente los derechos o no observar las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales, legales o reglamentarias, cuando el hecho o la omisión tengan leves consecuencias para el Congreso Nacional;

d) Acumular en un (1) mes entre ciento veintiuno (121) y trescientos (300) minutos de tardanza, o ausentarse de su trabajo durante el mismo lapso y número de minutos; así como, por tercera vez, marcar o firmar el medio de control de asistencia establecido, sin que le corresponda;

e) Usar lenguaje soez, vulgar o lascivo, con o sin fines ofensivos, dentro de la institución;

f) Usar vestimentas escandalosas o inadecuadas en relación con la naturaleza del lugar donde se trabaja;

g) Incurrir en cualesquiera otros hechos u omisiones calificables como faltas de tercer grado y que no ameriten una sanción mayor.

Art. 153.- Son faltas de cuarto grado, cuya comisión da lugar a imponer multas del 16 % al 25 % del sueldo de un (1) mes, las siguientes:

a) Reincidir en cualquiera de las faltas calificadas como de tercer grado;

b) Incumplir la jornada de trabajo, acumulando en un (1) mes entre trescientos uno (301) y cuatrocientos (400) minutos de tardanzas, sin justificación valedera;

c) Realizar en el lugar de trabajo, actividades ajenas a los deberes oficiales;

d) Ejercer actos de usura o extorsión, o prestar dinero a interés en el organismo donde trabaja el empleado;

e) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias narcóticas o estupefacientes;

f) Establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su autoridad o del cargo que desempeña;

g) Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos y de las oficinas, documentos o asuntos confidenciales o de cualquier naturaleza de los que empleado tenga conocimiento por su investidura pública;

h) Introducir o portar armas de cualquier naturaleza en el lugar de trabajo, salvo que se cuente con la autorización expresa de un funcionario competente, o que se utilicen por la naturaleza del cargo que se desempeña;

i) Utilizar vehículos, equipos o bienes del Congreso Nacional, sin la autorización de un funcionario competente;

j) Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo;

k) Requisar, sustraer o copiar informaciones de exclusivo uso o manejo de otros compañeros de trabajo, sin la expresa autorización de éstos o de su superior jerárquico cuando éstos fueren competentes para darla;

l) Promover o participar en huelgas ilegales, o apoyarlas en horas laborables, en desmedro del buen desempeño de sus funciones o de los deberes de otros empleados;

m) Hacer descuentos o retenciones de sueldos u otros beneficios sin autorización legal u oficial para ello;

n) Incurrir en cualesquiera otros hechos u omisiones que tengan repercusiones de gravedad similar a las faltas sancionadas en este artículo, y no ameriten sanción mayor.

Art. 154.- Son faltas de quinto grado, cuya comisión da lugar a destitución, las siguientes:

a) Reincidir en cualquiera de las faltas calificadas como de cuarto grado;

b) Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días laborables consecutivos, o tres (3) días en un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, incurriendo así en abandono de cargo;

c) Incumplir la jornada de trabajo, acumulando en un (1) mes más de cuatrocientos (400) minutos de tardanza, sin justificación;

d) Valerse de influencias jerárquicas para participar o conminar a mantener relaciones íntimas o sentimentales con compañero o compañera de trabajo;

e) Incurrir en actos lesivos a la moral o que promuevan el escándalo público en la institución o cualquiera de sus dependencias, dentro o fuera del horario normal de trabajo;

f) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por intermedio de otros, a cualquier título, comisiones, dádivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Congreso Nacional. A este efecto se presume como beneficios indebidos todos los que reciban el empleado, su esposa, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en forma cierta e inequívoca una relación de causa a efecto entre las actuaciones oficiales de dicho empleado y los beneficios indebidos de que se ha hecho mención;

g) Interesarse económicamente, en provecho propio o de terceros, en cualquier clase de contrato u operación que realice el organismo a que pertenece el empleado, o formalizar contratos de prestación de servicios con el Congreso Nacional, mientras esté en ejercicio de su cargo;

h) Manejar fraudulenta o inescrupulosamente fondos o bienes del Congreso Nacional para provecho propio o de otras personas;

i) Dejar de cumplir reiterada, intencional o dolosamente, los deberes, ejercer indebidamente los derechos o no respetar las prohibiciones e incompatibilidades constitucionales, legales o reglamentarias, cuando el hecho o la omisión tengan graves consecuencias de daños o perjuicios para los ciudadanos o el Congreso Nacional;

j) Tener participación por sí o por interpósitas personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas con la dependencia donde trabaja el empleado, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con el cargo que se desempeña, salvo que el empleado haya hecho conocer por escrito esta circunstancia para que se le releve del conocimiento, la tramitación o la autorización del asunto de que se trate; o asociarse a cualquier título y bajo cualquier razón social, a personas o a entidades que contraten con el organismo al cual el empleado presta sus servicios;

k) Prestar a título oneroso servicios de asesoría o de asistencia a instituciones del Estado en trabajos relacionados con las funciones propias de su cargo;

l) Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales el empleado tenga relaciones en razón del cargo que desempeña;

m) Cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros tipos de compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente empleado en la realización del servicio;

n) Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de los hechos certificados;

ñ) Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente contra los intereses del Congreso Nacional;

o) Incurrir en falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo, o realizar algún acto lesivo al buen nombre o a los intereses del Estado y del Congreso Nacional;

p) Causar intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Congreso Nacional;

q) Ser condenado penalmente con privación de libertad, mediante sentencia definitiva, por un acto delictuoso o criminal;

r) Aceptar de un gobierno extranjero o de un organismo internacional, un cargo, función, merced, honor o distinción de cualquier índole, sin previo permiso del Congreso Nacional;

s) Realizar actividades incompatibles con el decoro, la moral social, el desempeño del cargo, y el respeto y lealtad debidos al Congreso Nacional y a la colectividad;

t) Negarse a pagar las indemnizaciones económicas previstas por la Ley u obstaculizar o demorar los trámites para que se efectúe dicho pago;

u) Incumplir las instrucciones del órgano rector del sistema integral de recursos humanos y las decisiones del Tribunal Superior Administrativo;

v) Llevar una conducta pública o privada que impida la normal y aceptable prestación de los servicios a su cargo;

w) Descuidar en forma reiterada, intencional o dolosa el manejo de documentos y expedientes, con consecuencia de grave daño o perjuicio para los ciudadanos o el Congreso Nacional;

x) Alterar firmas, datos, documentos, registros, archivos u otros;

y) Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza o gravedad, a juicio de la autoridad sancionadora.

Párrafo. - La persona destituida por haber cometido cualquiera de las faltas señaladas en este artículo o por algunas de las otras causas igualmente graves o deshonrosas, a juicio de la autoridad sancionadora, quedará inhabilitado para prestar servicios al Congreso Nacional durante los cinco (5) años siguientes, contados desde la fecha de habérsele notificado la destitución en forma definitiva. Asimismo, perderá los servicios reconocidos por cesantía u otros establecidos

Art. 155.- Para los fines de calificación de las faltas se considerará la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes de las mismas.

Párrafo I.- Son circunstancias agravantes las siguientes:

a) Realizar el hecho o incurrir en la omisión de que se trate, en complicidad con subalternos o compañeros de trabajo;

b) Cometer la falta aprovechando la confianza depositada por su superior;

c) Cometer una falta para encubrir u ocultar otra;

d) Atribuir la responsabilidad a otras personas;

e) Infringir varios deberes o normas con una misma falta;

f) Premeditar o preparar ponderadamente la comisión de la falta, así como las modalidades empleadas para tal fin.

Párrafo II.- Son circunstancias atenuantes de las faltas las siguientes:

a) Haber observado buena conducta dentro y fuera del lugar de trabajo;

b) Haber sido inducido u obligado por un superior jerárquico a cometer la falta;

c) Confesar la falta oportunamente y mostrar genuino arrepentimiento por la actuación incorrecta;

d) Procurar la reparación del daño o perjuicio causado, antes de iniciarse el proceso disciplinario del caso; y,

e) Haber cometido la falta bajo ofuscación o por presión insuperable de personas o circunstancias ajenas a su propia voluntad.

CAPÍTULO VIII

Del Procedimiento Disciplinario

Art. 156.- Las sanciones disciplinarias previstas en este Reglamento serán impuestas por las autoridades competentes, en las formas y los plazos respectivos, según se indica a continuación:

a) La amonestación oral la hará en privado el secretario general administrativo, a través del superior jerárquico inmediato del empleado en falta, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de ocurrencia de dicha falta, o de que el mencionado superior tenga conocimiento de la misma;

b) La amonestación escrita la hará el superior jerárquico inmediato del empleado, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de ocurrencia de la mencionada falta, o de aquella en que dicho superior tenga conocimiento de la misma; y será comunicada por escrito al Departamento de Recursos Humanos respectivo, con copia al empleado amonestado;

c) La multa será impuesta en forma escrita, por el presidente del organismo al cual pertenezca dicho empleado, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de la ocurrencia de la mencionada falta, o de aquella en que dicho funcionario tenga conocimiento de la misma; y será comunicada por escrito al Departamento de Recursos Humanos correspondiente, con copia al empleado sancionado;

d) La destitución la hará por escrito el presidente de la Cámara de que se trate. Será comunicada del mismo modo al Departamento de Recursos Humanos con copia al empleado sancionado. El plazo para la aplicación de esta sanción es de treinta (30) días calendarios a partir de la fecha en que el presidente de la Cámara correspondiente reciba el expediente de lugar.

Párrafo. - Mientras estén abiertos los plazos de los recursos que previamente se establecen contra las sanciones impuestas, los efectos finales de éstas quedan suspendidos hasta que se tome decisión definitiva.

CAPÍTULO IX

De las Instancias y Recursos Contra las Sanciones Disciplinarias

Art. 157.- Todo agente del Congreso Nacional sancionado disciplinariamente podrá, por sí mismo o mediante el representante escogido por él o por la organización de empleados a que pertenezca, en virtud de lo dispuesto en los artículos 19 y 98 de la Ley, hacer uso de las instancias y recursos que se establecen a continuación:

a) De la Instancia Conciliatoria

b) Recurso de Reconsideración

c) Recurso Jerárquico

d) Recurso Contencioso Administrativo; y el

e) Recurso de Casación

Art. 158.- El empleado o funcionario que resulte sancionado o afectado por una decisión, tiene la opción de acogerse a la instancia conciliatoria, en el plazo de tres (3) días hábiles, después de haber sido notificado, en vez del Recurso de Reconsideración a que se refiere el artículo 161 del presente reglamento.

Párrafo. - En caso de decidirse por la fase conciliatoria, el empleado o funcionario lo notificará por escrito personalmente o a través de su representante, a la Comisión de Conciliación, vía la Dirección de Recursos Humanos.

Art. 159- Para agotar la fase conciliatoria a que se refiere el literal a) del artículo 98 de la Ley, sobre Carrera Administrativa del Congreso Nacional, se establece la Comisión de Conciliación, la cual estará integrada por quien ocupe la Dirección de Recursos Humanos o su representante, quien la presidirá; la parte afectada por la decisión o un representante acreditado por él; el superior jerárquico de quien emanó la sanción o decisión, y una secretaria de actas escogida por la presidencia conciliatoria, quien tendrá a su cargo documentar todas las incidencias al respecto y levantar el acta correspondiente, la cual será firmada por las partes concurrentes.

Art. 160.- En caso de que en la fase de conciliación no se arribe a ningún acuerdo, el empleado o funcionario podrá hacer uso del Recurso Jerárquico en un plazo de diez (10) días, contados desde la fecha del recibo por el interesado de la copia certificada del acta de no conciliación, que deberá serle enviada por correo certificado, entrega especial o entrega personal bajo firma del interesado.

Art. 161.- Recurso de Reconsideración, a ser interpuesto ante el mismo funcionario que le impuso la sanción. El plazo para presentar este recurso es de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de haber sido notificada al funcionario o empleado la falta que se le imputa. El funcionario ante quien se recurra deberá decidir al respecto en un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de su formal apoderamiento. Sin embargo, cuando el funcionario o empleado no haga uso de este recurso y se acoja en cambio a la instancia conciliatoria, si en este caso no se llegase a ningún acuerdo, podrá avocarse a lo que dispone el artículo 160 de este Reglamento.

Párrafo. - Una vez vencido el plazo sin que dicho funcionario decida al respecto, se considerará como inexistente el acto administrativo recurrido.

Art. 162.- Recurso Jerárquico, a ser interpuesto después de haberse agotado el recurso de reconsideración o la instancia de conciliación, ante el superior inmediato del funcionario que impuso la sanción. El plazo para presentar este recurso es de diez (10) días hábiles contados desde la fecha del recibo por el interesado de la comunicación sobre el resultado de su recurso de reconsideración que, por correo certificado, entrega especial o entrega personal bajo firma del interesado deberá efectuar la autoridad sancionadora. El funcionario ante quien se recurra deberá decidir al respecto en un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha del formal apoderamiento del caso.

Art. 163- En los casos de destitución, los funcionarios y empleados podrán utilizar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior Administrativo, dentro del plazo señalado.

Párrafo. - Si una o ambas partes tuvieren interés en la instancia conciliatoria, podrán, antes de que la persona afectada pueda interponer los recursos de que trata este capítulo, apoderar del asunto a la Comisión de Conciliación.

Art. 164.- El recurso Contencioso Administrativo es la vía de derecho concedida a todo agente para acudir por ante el Tribunal Superior Administrativo. El plazo para el ejercicio de este recurso será de quince (15) días a partir de la comunicación formal de la decisión que intervenga en ocasión del recurso jerárquico o contados desde la fecha del recibo por el interesado de la copia certificada del acta de no conciliación.

Art. 165.- No pueden ejercerse dos (2) recursos al mismo tiempo, en ninguna circunstancia.

Art. 166.- El recurso de casación será ejercido contra las decisiones dictadas por el Tribunal Superior Administrativo.

CAPÍTULO X

De la Responsabilidad Civil del Congreso Nacional y del Servidor

Art. 167.- La Cámara Legislativa que corresponda, y el servidor actuante, serán solidariamente responsables y responderán patrimonialmente por los daños y perjuicios causados por la acción u omisión del funcionario actuante. La jurisdicción contencioso-administrativa será competente para conocer de dichos incumplimientos y para establecer las indemnizaciones correspondientes.

Art. 168.- En los casos en que la persona perjudicada no haya dirigido su acción declamatoria de daños y perjuicios contra el funcionario responsable, la Cámara Legislativa, condenada a resarcir el perjuicio causado por la gestión dolosa, culposa o negligente de dicho funcionario, podrá ejercer contra éste, una acción en repetición.

Párrafo. El Procurador General Administrativo podrá, de oficio, ejercer en representación del Congreso Nacional, como Poder del Estado, la acción en repetición contra el funcionario responsable.

CAPÍTULO XI

De las Normas Complementarias

Art. 169.- Acorde con lo establecido en el artículo 99 de la Ley, en materia disciplinaria se observarán las siguientes normas complementarias:

a) Todos los medios de prueba son admisibles conforme a las previsiones del derecho común;

b) En el caso de que un empleado o funcionario incurra simultáneamente en dos (2) o más faltas, para las cuales se hayan previsto sanciones distintas, la autoridad competente aplicará la sanción mayor que corresponda. En tal situación se procederá a investigar los hechos u omisiones que conlleven la sanción más severa, conforme al procedimiento respectivo;

c) Sólo se aplicará una sanción cuando en forma fehaciente y conforme a la Ley, sea probada una falta disciplinaria, o si esta resulta evidente a juicio de la autoridad actuante;

d) La severidad de la sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida;

e) Los órganos disciplinarios garantizarán en forma plena y efectiva el derecho general de reclamación que asiste a toda persona sancionada;

f) La acción disciplinaria se ejercerá siempre a partir de criterios o elementos objetivos, prescindiendo de inclinaciones subjetivas, irrelevantes, afectivas o caprichosas;

g) Los procedimientos disciplinarios serán observados en forma sumaria, ágil, expedita, libre de trámites innecesarios y de modo gratuito;

h) Los funcionarios y empleados a quienes se les aplique acción disciplinaria son informados de los resultados de cada acto, medida o instancia que sean de su legítimo interés.

CAPÍTULO XII

De la suspensión con disfrute de sueldo para realizar investigación disciplinaria

Art. 170- Cualquier empleado o funcionario podrá ser suspendido de sus funciones oficiales, con disfrute de sueldo, sin que tal medida constituya en sí misma una sanción, en virtud de lo previsto en el artículo 100 de la Ley, en los casos siguientes:

a) Cuando existan suficientes elementos o factores que hagan presumir que ha cometido alguna de las faltas disciplinarias previstas en este Reglamento;

b) Cuando se denuncie formalmente que este servidor ha cometido una o más faltas disciplinarias o de otra índole, y hasta tanto se tome una acción definitiva;

c) Cuando, sin existir la presunción ni la denuncia antes dicha, una autoridad competente considere que conviene alejar a ese servidor de su cargo o función, a fin de facilitar la investigación de hechos u omisiones previstos como faltas disciplinarias o de otra índole, sean éstas imputables al mismo servidor o a otros funcionarios y empleados del Congreso Nacional.

Párrafo I.- Este tipo de suspensión no excederá de treinta (30) días hábiles, como cuestión ordinaria, salvo que la máxima autoridad actuante en cada caso estime que es necesario contar con más tiempo para completar la investigación; situación esta última en que podrá disponer una única prórroga por otros treinta (30) días hábiles.

Párrafo II.- Si se comprueba la existencia de una o más faltas, imputables a dicho servidor o a otros empleados, en las situaciones señaladas en este artículo, se procederá según lo previsto en el presente Reglamento.

Párrafo III.- Respecto de los empleados que resulten sancionados se anotarán los pormenores correspondientes en cada historial personal, en lo referente a acciones disciplinarias o de otra naturaleza.

Párrafo IV.- Si no se establece falta alguna, el empleado o los empleados suspendidos en las circunstancias anotadas, serán reintegrados a sus cargos respectivos, con plenitud de derechos y no se hará anotación alguna en su historial personal.

Art. 171.- Este tipo de suspensión, en todo caso, sólo podrá ser solicitado por el director del departamento en que labora el agente, el Director de Recursos Humanos o por el Secretario General del área correspondiente, y siempre deberá tener la aprobación del Secretario General Administrativo de la Cámara de que se trate.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS LEGISLADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

5) OTRAS DISPOSICIONES LEGALES DE CUMPLIMIENTO DE LOS LEGISLADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA

LEY NO. 311-14 SOBRE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO

La Constitución de la República en su artículo 146, numeral 3, establece lo siguiente:

"Es obligatoria, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente".

El Artículo 1 de la Ley No. 311-14 Sobre Declaración Jurada de Patrimonio establece que tiene por objeto instituir el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio; establecer las instituciones responsables de su aplicación y jerarquizar su autoridad, facilitar la coordinación institucional, promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa las herramientas normativas que le permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.

El Decreto 92-16 Sobre el Reglamento de la Aplicación de la Ley 311-14 Sobre Declaración Jurada de Patrimonio, estable en su artículo 2, los sujetos obligados a declarar, dentro de los cuales se encuentra en los numerales 2 y 32, los siguientes:

Los Senadores y Diputados, así como los secretarios administrativos, y los encargados de compras y contrataciones del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.

Es responsabilidad de los Diputados y Diputadas, la Secretaria Administrativa, el Director Financiero y el Encargado de Compras y Contrataciones de la Cámara de Diputados de la República cumplir con la Declaración Jurada de Patrimonio, tal y como lo contempla la Constitución de la República, la Ley No. 311-14 y el Decreto No. 92-16, y el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 311-14.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

LEY NO. 105-13 SOBRE REGULACIÓN SALARIAL DEL ESTADO DOMINICANO

El Artículo 1 señala que esta ley tiene por objeto establecer el marco regulador de la política salarial para todo el sector público dominicano, con la finalidad de proporcionar una remuneración equitativa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado.

El párrafo del Artículo 1 indica que a los fines de esta ley se entiende por servidores públicos a todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman.

En su Artículo 2, expresa que las disposiciones de esta ley son aplicables de manera obligatoria a todas las categorías de cargos diseñados y establecidos en los órganos y entes comprendidos dentro de su ámbito de aplicación.

El Artículo 3, muestra los sujetos a las regulaciones previstas en esta Ley y dentro de los cuales se encuentra en el numeral 2, el Poder Legislativo.

En el capítulo VI de las Incompatibilidades y Prohibiciones de esta ley, en su Artículo 25 Sobre Prohibiciones de carácter ético, señala que, sin menoscabo de las disposiciones de la Ley Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, y Servicios del Sector Público y otra disposición al respecto, a todos los funcionarios sujetos a la presente ley les está prohibido:

“Tener participación en empresas que tengan convenios o contratos de cualquier naturaleza con el sector público, así como con empresas subcontratistas de éstas o que perciban ayudas públicas”:

a) Utilizar su cargo para obtener ventajas, beneficios o privilegios que no estén permitido por la ley, de manera directa o indirecta, para él, algún miembro de su familia o cualquier otra persona, negocio entidad.

b) Solicitar o aceptar, además del sueldo a que tiene derecho por su cargo, algún bien de valor económico como pago, retribución o gratificación por realizar los deberes y responsabilidades inherentes a su cargo.

c) Ser parte o tener algún interés en las ganancias o beneficios producto de un contrato con cualquier institución pública o privada.

d) Obtener préstamos y contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo público que desempeñan.

e) Utilizar en su provecho o de terceros, los bienes, equipo, valores y materiales del Estado, sobre todo aquellos que están bajo su responsabilidad.

f) Promover y propiciar el nepotismo en las oficinas del Estado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Función Pública.

g) Percibir salarios por labores ejecutadas después del vencimiento del período de prueba que le haya sido señalado, a menos que sea declarado empleado regular o nombrado de conformidad con las normas de la Ley de Función Pública y su Reglamento de Aplicación.

El Artículo 26.- Prohibición de beneficios por gestión. Queda prohibida la concesión de beneficios o incentivos a todo funcionario o empleado público sujeto al ámbito de aplicación de esta ley, por resultados de gestiones administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia.

El Artículo 27.- Remuneraciones especiales. Los cargos del sector público dentro de cuyas funciones esté las de prescindir o formar parte de algún Consejo, junta, comisiones, órganos decisorios, asesores consultivos, no requieren remuneración especial adicional, incentivos o gastos de representación accesorios o diferentes a los prescritos en esta ley. Queda expresamente prohibida la recepción de pago de cualquier índole por el desempeño de estas funciones.

El Artículo 28.- Reprogramaciones con fines de aumento salarial. Queda prohibido realizar reprogramaciones tendentes a aumentos salariales aislados.

El Artículo 29.- Modificaciones salariales. Para los efectos de esta ley queda prohibida la modificación de salarios una vez determinadas las escalas para cada sector o agregado institucional.

Artículo 30.- Tarjetas de Crédito. Queda prohibida la asignación y el uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto nivel establecidos en esta ley, con excepción de los puestos correspondientes al Presidente y Vice-Presidente de la República, Presidentes de las Cámaras Legislativas, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, y los titulares de órganos y entes de origen constitucional.

En el capítulo VII de las Sanciones de esta ley, en su Artículo 32 sobre Sanción por incompatibilidades, señala que los funcionarios que incumplan las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en esta ley, así como aquellos que den un mal uso a los gastos de representación asignados, serán sancionados con la pena de inhabilitación para el desempeño de funciones públicas hasta un período de cinco (5) años. En el caso de mal uso de los gastos de representación, se dispondrá, además, el reintegro del duplo de la cantidad malversada.

En el párrafo de este artículo, indica que a los fines del juicio político establecido en la Constitución, se considerará falta grave la violación de las prohibiciones establecidas en esta ley.

El Artículo 38.- Sobre Denuncias de faltas, establece que cualquier ciudadano está facultado para denunciar ante los órganos competentes, el incumplimiento de esta ley por parte de funcionarios obligados, y los órganos encargados de su vigilancia actuar en consecuencia con la denuncia realizada.

Es responsabilidad de los Diputados y Diputadas, su personal de apoyo, y todo el personal de las secretarias generales legislativa y administrativa de la Cámara de Diputados de la República Dominicana velar por el cumplimiento de esta ley en lo que le sea aplicable.

LEY NO. 340-06 SOBRE COMPRAS Y CONTRACIONES CON MODIFICACIONES DE LA LEY NO. 449-06 SU REGLAMENTO DE APLICACIÓN NO. 416-23, y DE LA LEY NO. 47-20 SU REGLAMENTO NO. 434-20

El Artículo 1 señala que esta ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas y otorgar concesiones, así como sus Modalidades.

En el Artículo 2, se encuentran los entes sujetos a las regulaciones de esta ley, dentro de los cuales está el Gobierno Central, y el párrafo I de este artículo señala que a los efectos de esta ley se entenderá por Gobierno Central la parte del sector público que tiene por objeto la conducción político administrativo, legislativo, judicial, electoral y fiscalizadora de la República, conformada por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

En el capítulo II Sobre Normas Generales Comunes a todos organismos comprendidos, el Artículo 3 establece que las compras y contrataciones se regirán por los siguientes principios:

1) **Principio de eficiencia**. Se procurará seleccionar la oferta que más convenga a la satisfacción del interés general y el cumplimiento de los fines cometidos de la administración. Los actos de las partes se interpretarán de forma que se favorezca al cumplimiento de objetivos y se facilite la decisión final, en condiciones favorables para el interés general;

2) **Principio de igualdad y libre competencia**. En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. Los reglamentos de esta ley y disposiciones que rijan los procedimientos específicos de las contrataciones no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes;

3) **Principio de transparencia y publicidad**. Las compras y contrataciones públicas comprendidas en esta ley se ejecutarán en todas sus etapas en un contexto de transparencia basado en la publicidad y difusión de las actuaciones derivadas de la aplicación de esta ley. Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los medios correspondientes a los requerimientos de cada proceso. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de contratación administrativa y a la información complementaria. La utilización de la tecnología de información facilita el acceso de la comunidad a la gestión del Estado en dicha materia;

4) **Principio de economía y flexibilidad**. Las normas establecerán reglas claras para asegurar la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente técnica y económicamente. Además, se contemplarán regulaciones que contribuyan a una mayor economía en la preparación de las propuestas y de los contratos;

5) **Principio de equidad.** El contrato se considerará como un todo en donde los intereses de las partes se condicionan entre sí. Entre los derechos y obligaciones de las partes habrá una correlación con equivalencia de honestidad y justicia;

6) **Principio de responsabilidad, moralidad y buena fe**. Los servidores públicos estarán obligados a procurar la correcta ejecución de los actos que conllevan los procesos de contratación, el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad del contratista y de terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Las entidades públicas y sus servidores serán pasibles de las sanciones que prevea la normativa vigente;

7) **Principio de reciprocidad**. El Gobierno procurará un trato justo a los oferentes dominicanos cuando participen en otros países, otorgando similar trato a los participantes extranjeros en cuanto a condiciones, requisitos, procedimientos y criterios utilizados en las licitaciones;

8) **Principio de Participación**. El Estado procurará la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida. Al mismo tiempo, estimulará la participación de pequeñas y medianas empresas, no obstante reconocer su limitada capacidad financiera y tecnológica, con el objetivo de elevar su capacidad competitiva;

9) **Principio de razonabilidad**. Ninguna actuación, medida o decisión de autoridad competente en la aplicación e interpretación de esta ley, deberá exceder lo que sea necesario para alcanzar los objetivos de transparencia, licitud, competencia y protección efectiva del interés y del orden público, perseguidos por esta ley. Dichas actuaciones, medidas o decisiones no deberán ordenar o prohibir más de lo que es razonable y justo a la luz de las disposiciones de esta ley.

El Artículo 14 de esta ley, en los Numerales 1, 3, 4 y 5 señala que no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Cámara de Cuentas y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Subcontralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subsecretario y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas en el Artículo 2, Numerales 1 al 5;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado; inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreados hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales del 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria.

El párrafo I de este artículo 14, establece que para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis meses después de la salida del cargo.

El párrafo II de este artículo, indica que para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será la aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

Es responsabilidad de los Diputados y Diputadas, su personal de apoyo, y todo el personal de la Secretaria General Legislativa y Administrativa de la Cámara de Diputados de la República velar por el cumplimiento de esta ley y de su reglamento de aplicación en lo que le sea aplicable.

PARTE SUPLETORIA
del Régimen Ético y Disciplinario de los Funcionarios y Servidores Públicos contenido en la Ley No. 41-08 de Función Pública y en el Reglamento de Aplicación 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

6) Parte Supletoria del Régimen Ético y Disciplinario de los Funcionarios y Servidores Públicos contenido en la Ley No. 41-08 de Función Pública y en el Reglamento de Aplicación 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública

Título XIV
Disposiciones Generales

Capítulo I
Fuentes Supletorias,

La Ley No. 02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional y su Reglamento de Aplicación No. 01-06 en Disposiciones Generales, Fuentes Supletorias, señalan lo siguiente:

Artículo 113. Los casos no previstos deberán ser resueltos de acuerdo a los principios básicos de la presente ley. En tales situaciones tanto el juez de lo contencioso-administrativo apoderado de la controversia suscitada entre el Estado y un agente del Congreso Nacional o el funcionario responsable de la aplicación del estatuto, en defecto de las disposiciones supletorias, deberán recurrir al derecho administrativo como norma común y general."

En tal sentido, se presenta a continuación la parte supletoria del Régimen Ético y Disciplinario de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados contenida en la Ley No. 41-08 de Función Pública o en el Reglamento de Aplicación No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública y que no está prevista en la Ley No. 02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional ni en el Reglamento de Aplicación No. 01-06, la cual es de la responsabilidad de los funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados velar por su cumplimiento.

1) La Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo XI del Régimen Ético y Disciplinario, establece lo siguiente:

Artículo 77, Capítulo I De sus Principios Rectores, señala:

"**Votación de Justicia**: Obliga a los servidores públicos a actuar con equidad y sin discriminación por razones políticas, religión, etnia, posición social y económica, o de otra índole".

2) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ley No. 41-08 de Función Pública capitulo x, señala la siguiente parte supletoria:

Artículo 97, El régimen ético y disciplinario de los funcionarios y servidores públicos conforme con los artículos 77 y siguientes de la ley está dirigido a fomentar su eficiencia, eficacia y el sentido de pertenencia institucional de los servicios públicos a fin de promover el cumplimiento del bien común el interés general y preservar la moral publica

Párrafo. - Sus objetivos son los siguientes:

a) Contribuir a que los funcionarios públicos cumplan, leal, asidua y honestamente sus deberes y responsabilidades, a fin de alcanzar la mayor eficiencia del servicio público.

b) Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prorrogativas que se consagran a favor de los empleados y de la Administración Pública.

c) Procurar que las faltas disciplinarias sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a estrictos criterios de legalidad, equidad y objetividad.

d) Proveer los recursos y vías de acción necesarios para la salvaguarda de los derechos y legítimos intereses de los servidores públicos y de la Administración del Estado.

Art. 100. Es responsabilidad personal de cada funcionario o servidor público cumplir los deberes y prohibiciones establecidos en la ley y el presente Reglamento. Los encargados de unidades y aquellos funcionarios o servidores que tengan personal bajo su supervisión son responsables de que su personal cumpla con dichas disposiciones.

Párrafo I.-En caso de incumplimiento de los deberes y prohibiciones, corresponde al supervisor inmediato de los funcionarios o servidores públicos hacer las advertencias, consejos y observaciones verbales, así como procurar que les sean impuestas las sanciones que establece la Ley, de acuerdo con el hecho u omisión.

Párrafo II.-El supervisor inmediato del funcionario o servidor público deberá llevar un informe de incidentes críticos en aquellos casos en que sus supervisados hayan cometido hechos u omisiones que no estén tipificadas como faltas por la Ley, de las cuales fueren advertidos, aconsejados y observados de manera verbal, a los fines de evaluación del desempeño y otras acciones.

Párrafo III.- A los fines de aplicar la evaluación del desempeño al funcionario o servidor público se considerará el hecho verbal de no haber sido advertido, aconsejado y observado de manera verbal por la comisión de hechos u omisiones en el transcurso del periodo de dicha evaluación.

3) La Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo II De las Prohibiciones, en su artículo 80, segundo párrafo señala la siguiente parte supletoria:

Art. 80.- A los servidores públicos les está prohibido incurrir en los actos descritos a continuación y que la presente ley califica como faltas disciplinarias, independientemente de que constituyan infracciones penales, civiles o administrativas consagradas y sancionadas en otras leyes vigentes:

El numeral 3 del artículo 80, indica lo siguiente:

"Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría o de asistencia al Estado, relacionados con las funciones propias de sus cargos"

El numeral 5 del artículo 80 en su segundo párrafo indica lo siguiente:

“Aceptar designación para desempeñar en forma simultánea más de un cargo del Estado, salvo cuando se trate de labores docentes, culturales, de investigación y las de carácter honorífico, no afectadas por incompatibilidad legal, y con la debida reposición horaria cuando hubiera superposición de este tipo. La aceptación de un segundo cargo público incompatible con el que esté ejerciendo, supone la renuncia automática del primero sin desmedro de la responsabilidad que corresponda”

El numeral 9 artículo 80 indica lo siguiente:

“Participar en actividades oficiales en las que se traten temas sobre los cuales el servidor público tenga intereses particulares económicos, patrimoniales o de índole política que en algún modo planteen conflictos de intereses”;

El numeral 10 artículo 80 en su segundo párrafo indica lo siguiente:

“Valerse de sus influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público”

El numeral 12 del artículo, indica lo siguiente:

“Representar o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones extrajudiciales contra la administración, excepto en casos de defensa de intereses personales del servidor público, de su cónyuge y de sus parientes consanguíneos o afines en primer grado”

El numeral 14 del artículo, indica lo siguiente:

"Requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su propio provecho o en provecho de terceros"

El numeral 16 de este artículo, indica lo siguiente:

Actuar en aquellos casos en que tengan intereses particulares que planteen conflictos de intereses para el servidor público;

4) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley No.41-08 de Función Pública, en su Capítulo XI del Régimen Disciplinario. Gradación de las Faltas, Sanciones, en su artículo 103, primer párrafo, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 103.- Es responsabilidad de las Oficinas de Recursos Humanos de los órganos públicos llevar y mantener actualizados los registros automatizados en el Sistema de administración de Servidores Públicos (SASP) y hacer las anotaciones en el historial personal del funcionario o servidor público sancionado y sus documentos básicos serán anexados a los expedientes respectivos.

5) La Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo VII Del Régimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, artículo 82 señala como faltas de primer grado, la siguiente parte supletoria:

Numeral 2: Llegar tarde al trabajo de manera reiterada;

6) La Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo VII Del Régimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, artículo 83 Son faltas de segundo grado, señala la siguiente parte supletoria:

Numeral 3: Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada y ofensiva a los compañeros, subalternos, superiores jerárquicos y al público;

7) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario. Gradación de las Faltas, Sanciones, en sus artículos 107 y 108 señala la siguiente parte supletoria:

Art. 107.-El período de suspensión de funciones del servidor o funcionario público sancionado por la comisión de faltas de segundo grado estará determinado por la gravedad del hecho cometido, a cuyos fines la autoridad sancionadora considerará las circunstancias atenuantes y agravantes de dicha falta.

Art. 108.- El titular del órgano al cual pertenece el servidor público a quien de conformidad con el artículo 85 de la Ley le corresponde la facultad para imponer la suspensión de hasta noventa (90) días, tendrá un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de ocurrencia de la falta de segundo grado o de que tenga conocimiento de la misma.

Párrafo I.- A los fines del presente artículo, el supervisor inmediato del empleado, en un plazo de cinco (5) días hábiles, elaborará el reporte sobre el hecho u omisión del funcionario o servidor público que ha incurrido en la falta solicitará al funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, el trámite del expediente a la Oficina de Recursos Humanos. Si lo considera necesario, el funcionario de mayor jerarquía podrá ordenar la apertura de una investigación.

Párrafo II.-El funcionario a quien se le reporte una falta de segundo grado, en un plazo de cinco (5) días hábiles tramitará el expediente a la Oficina de Recursos Humanos, a los fines de que sea elaborada la acción de personal correspondiente a la suspensión.

Párrafo III.-La Oficina de Recursos Humanos en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles elaborará y tramitará la acción de personal ante el titular del órgano.

8) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo XI del Régimen Disciplinario. Gradación de las Faltas, Sanciones, en el artículo 109 señala que constituyen faltas de tercer grado la siguiente parte supletoria:

Numeral 7 del artículo 109 indica lo siguiente:

“Negarse a prestar servicios en caso de calamidad pública, a las autoridades correspondientes, cuando las mismas estén actuando en función de defensa civil o de socorro a la comunidad”

9) La Ley No. 41-08 de Función Pública, Capítulo VII Del Régimen Disciplinario, Faltas y Sanciones, artículo 84 señala que constituyen faltas de tercer grado, la siguiente parte supletoria:

Numeral 18 de este artículo que indica lo siguiente:

“Auspiciar o celebrar reuniones que conlleven interrupción de las labores de la institución”

10) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulos XI del Régimen Disciplinario. Gradación de las Faltas, Sanciones, en su artículo 119 Para los fines de calificación de las faltas, se considerará la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes, según sea el caso, señala la siguiente parte supletoria:

Párrafo I.- Son circunstancias agravantes.

d) Rehusar la responsabilidad o atribuírsela a otras personas.

11) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su Capítulo XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 110, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 110.-Es responsabilidad del supervisor inmediato del funcionario o servidor público, de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad a la que pertenece, elaborar el informe sobre los hechos u omisiones cometidas por el funcionario o servidor público de su área, y solicitar a la Oficina de Recursos Humanos la apertura de la investigación a que hubiere lugar, en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de la ocurrencia de la falta o de la fecha en que tenga conocimiento de la misma.

12) La Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, en su artículo 87, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 87.-Cuando el servidor público estuviere presuntamente incurso en una causal de destitución, se procederá de la siguiente manera:

1. El funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, solicitará a la Oficina de Recursos Humanos la apertura de la averiguación a que hubiera lugar;

2. La Oficina de Recursos Humanos instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos a ser formulados al servidor público investigado, si fuere el caso;

3. Una vez cumplido lo establecido en el numeral precedente, la Oficina de Recursos Humanos notificará al servidor público investigado para que tenga acceso al expediente y ejerza su derecho a defensa, dejando constancia de ello en el expediente;

4. En el quinto día hábil después de haber quedado notificado el servidor público, la Oficina de Recursos Humanos le formulará los cargos a que hubiere lugar. En el lapso de cinco días hábiles siguientes, el servidor público consignará su escrito de descargo;

5. El servidor público investigado, durante el lapso previo a la formulación de cargos y dentro del lapso para consignar su escrito de descargo, tendrá acceso al expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias a los fines de la preparación de su defensa, salvo aquellos documentos que puedan ser considerados como reservados;

6. Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para que el investigado promueva y evacue las pruebas que considere conveniente;

7. Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas concedidas al servidor público, se remitirá el expediente a la consultoría jurídica o la unidad similar del órgano o entidad a fin de que opine sobre la procedencia o no de la destitución. A tal fin, la consultoría jurídica dispondrá de un lapso de diez días hábiles;

8. La Máxima autoridad del órgano o entidad decidirá dentro de los cinco días hábiles siguientes al dictamen del a consultoría jurídica y notificará al servidor público investigado del resultado, indicándole en la misma notificación del acto administrativo el recurso jurisdiccional que procediere contra dicho acto, el tribunal por antes el cual podrá interponerlo y el término para su presentación;

9. De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente.

El incumplimiento del procedimiento disciplinario a que se refiere este artículo por parte de los titulares de las Oficinas de Recursos Humanos será causal de destitución y nulidad del procedimiento aplicado.

13) La Ley No. 41-08 de Función Pública, en su Capítulo IV Del Régimen Disciplinario, en su artículo 89, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 89.- Si a un servidor público le ha sido dictada medida preventiva de privación de libertad, se le suspenderá del ejercicio del cargo sin goce de sueldo. Esta suspensión no podrá tener una duración mayor a seis meses.

En caso de sentencia absolutoria con posteridad al lapso previsto en este artículo, la administración reincorporará al servidor público con el pago de los sueldos dejados de percibir durante el lapso en que estuvo suspendido.

14) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley No. 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 111, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 111.- De conformidad con el artículo 87 de la Ley, la Oficina de Recursos Humanos, el funcionario o servidor público presuntamente incurso en una causal de destitución, la Consultoría Jurídica, y la Máxima autoridad de la institución procederán a la documentación y análisis del hecho u omisión, y tipificación de la falta, a los fines de recomendar a la autoridad competente la decisión de lugar.

15) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 112, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 112.- Cuando el informe elaborado por el supervisor inmediato del funcionario o servidor público y remitido a la Oficina de Recursos Humanos por funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad a la que pertenece, esté fundamento en evidencias fehacientes y/o testimoniales de los hechos u omisiones que se le imputan al funcionario o servidor público incurso en una causal de destitución, se agotará el procedimiento disciplinario establecido por el artículo 87 de la Ley, sin la necesidad de iniciar investigación alguna.

16) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 113 y párrafos, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 113.- Cuando el informe elaborado por el supervisor inmediato del funcionario o servidor público y remitido a la Oficina de Recursos Humanos por funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad a la que pertenece no cuente con las evidencias fehacientes y/o testimoniales de los hechos u omisiones que se le imputan al funcionario o servidor público presuntamente incurso en una causal de destitución, se procederá conforme el inciso 1ro. del artículo 87 de la Ley, a la apertura de la investigación a que diere lugar.

Párrafo I.- Cuando lo considere necesario la Oficina de Recursos Humanos, para la apertura de la investigación se conformará una Comisión Investigadora formada por un representante del Comité de Ética del órgano, un representante del área o unidad que resultare lesionada por el hecho u omisión, un representante de la Asociación de Servidores Públicos de la institución, un representante de la Unidad

encargada de la Seguridad, si se tratara de la desaparición de equipos, bienes o documentos, y el titular de la Oficina de Recursos Humanos, quien la presidirá.

Párrafo II.- El plazo para realizar dicha investigación no excederá de treinta (30) días, y deberá coincidir con el lapso de suspensión del servidor que dispone el artículo 88 de la Ley.

17) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 114, señala la siguiente parte supletoria:

Artículo 114.- Cuando como resultado de la investigación se determine que los hechos u omisión del funcionario o servidor público presuntamente incurso en una causal de destitución, no se tipifican como faltas de tercer grado, sino de primer o segundo grado se procederá conforme el procedimiento establecido por la Ley y el presente Reglamento para imponer la sanción inferior que le corresponda.

18) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 115, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 115.-Mientras estén abiertos los plazos de los recursos establecidos en los artículos 72 y siguientes de la Ley, contra las sanciones impuestas en los funcionarios o servidores públicos, los efectos finales de estas quedan suspendidos hasta que se tome decisión definitiva.

19) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 116, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 116.-La institución a la cual pertenezca el funcionario o servidor público destituido notificará por escrito a la Secretaria de Estado de Administración Pública, copia del acto administrativo de desvinculación, y este acto debe expresar las referencias de los hechos u omisiones cometidas por el funcionario o servidor público.

20) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su CAPÍTULO XI del Régimen Disciplinario, en su artículo 118 y párrafo, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 118.-Es responsabilidad del titular del órgano y del funcionario de mayor jerarquía dentro de la unidad a la que pertenezca el funcionario público de carrera administrativa, conjuntamente con la Oficina de Recursos Humanos, cumplir con el procedimiento disciplinario, previo a la desvinculación mismo.

Párrafo. - Todos los casos de funcionarios públicos de carrera destituidos mediante procedimiento disciplinario, por estar incursos en falta de tercer grado, deberán ser reportados a la Secretaria de Estado de Administración Pública, a los fines de proceder al registro y posible inhabilitación, una vez transcurridos los plazos de reclamación o dictada sentencia definitiva en cuanto al caso.

21) El Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, de la Ley 41-08 de Función Pública, en su Capítulo XII Normas Complementarias, en su artículo 125 letra f, señala la siguiente parte supletoria:

Art. 125.-En materia disciplinarias se observarán las siguientes normas complementarias:

f) Las circunstancias agravantes y atenuantes de las faltas disciplinarias serán observadas y tenidas en cuenta, conforme a los términos siguientes:

i. Si concurrieren 2 o más circunstancias agravantes, se aplicará el máximo de la sanción establecida;

ii. Si concurrieren tantas circunstancias agravantes como atenuantes, o sólo se manifestare una de estas, la autoridad competente para imponer la sanción podrá ponderar libremente la gravedad de la falta o faltas cometidas, para determinar la sanción que ha de aplicarse.

7. Bibliografía

1) Constitución de la República Dominicana 2024

2) Reglamento de la Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobado mediante la Resolución No. 00669 de fecha 24 de julio de 2024.

3) Ley No. 02-06 del 10 de enero de 2006 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional

4) Reglamento No. 01-06 de aplicación de la Ley 02-06 de Carrera Administrativa del Congreso Nacional

5) Resolución No. 01078 de la Sesión del Pleno de fecha 25 de julio de 2013 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, el cual define la Misión, Visión y Valores de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.

6) Ley No. 10-07 Que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República Dominicana.

7) Resolución 001/11 de fecha 19 de septiembre de 2011 de la Contraloría General de la República sobre la emisión de las Normas Básicas de Control Interno para el Sector Público Dominicano

8) Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

9) Pauta No. 1-002 Preparación o ajuste del Código de Ética Pública a la medida de cada institución, de la Guía I Ambiente de Control de las NOBACI.

10) Ley No. 41-08 de Función Pública

11) Reglamento No. 523-09 de Relaciones Laborables en la Administración Pública, el cual desarrolla las disposiciones de la Ley 41-08 que regulan las relaciones de trabajo y conducta entre los órganos del Estado, los funcionarios y servidores públicos para garantizar la paz laboral.

10) Ley No. 311-14 de fecha 8 de agosto de 2014 Sobre Declaración Jurada de Patrimonio

11) Ley No. 105-13 de fecha 8 de agosto 2013 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano

12) Ley No. 340-06 de fecha 18 de agosto de 2006 Sobre Compras y Contrataciones con Modificaciones de la Ley No. 449.06 y la Ley No. 47-20, y su Reglamento de Aplicación No. 543-12.

Dirección de elaboración	Lic. Mario Doñé Montalvo Director de Planificación y Desarrollo Institucional
Revisión	Doctora Lelis Santana Fernández Auditora Legislativa
Aprobación	r vonny Mo Lic. Francisca ne Ivonny Mota Del Js. Secretaria General Legislativa c. E Lic. Elvira Méndez Secretaria General Administrativa

Aprobado el día 10 de julio del 2025